

Las revoluciones árabes: hacia un cambio de paradigma

Ignacio Álvarez-Ossorio

*Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante**



Las revueltas populares han hecho tambalearse algunos de los regímenes árabes más autoritarios, provocando la caída de Ben Alí en Túnez y Mubarak en Egipto y una intervención militar contra Gadafi en Libia. La población ha perdido el miedo a sus gobernantes y a sus aparatos represivos y ha tomado las calles demandando mayores libertades y el fin de las autocracias. Las manifestaciones son, ante todo, una muestra de descontento hacia unos gobernantes que se perpetúan en el tiempo y que gestionan los recursos estatales como si fueran de su propiedad. La Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha descrito esta situación como una 'tormenta perfecta' cuya onda expansiva podría extenderse al conjunto del mundo árabe en el caso de que no se adopten profundas reformas con carácter inmediato.

* Esta investigación se enmarca dentro del proyecto I+D del MICINN 'Sociedad civil y contestación política en Oriente Medio: dinámicas internas y estrategias externas' (CSO2009-11729). Más información: ialvarez@ua.es

*El malestar árabe
nace de la
frustración por la
perpetuación de
los regímenes
autocráticos, la
corrupción
endémica y la
falta de
alternativa
política*

El malestar árabe nace de una acumulación de frustraciones. La primera de ellas se debe a la existencia de unos regímenes autocráticos que se hicieron con el poder tras las independencias nacionales y que siguen detentándolo como ‘padres de la patria’ o supuestos garantes de la estabilidad interna. La segunda de las frustraciones viene motivada por una corrupción endémica, protagonizada por círculos de clanes y familias estrechamente asociados con los gobernantes, que ha corroído las estructuras estatales. En tercer lugar, no hay cualquier alternativa política viable, puesto que los dictadores han suprimido toda voz crítica y descabezado toda oposición, ya fuera real o imaginaria. Los manifestantes han salido a las calles para decir ‘basta ya’ a este círculo vicioso.

Pese a las particularidades de cada país, la población árabe comparte unas mismas demandas, como el desmantelamiento del Estado autoritario, el respeto al Estado de derecho, la persecución de la corrupción, la derogación de las leyes de emergencia, el fin de los sistemas monopartidistas, la separación de poderes, la enmienda de las Constituciones y, por último, la celebración de elecciones libres, transparentes y, sobre todo, multipartidistas. En definitiva: más libertades y más democracia.

Este estallido popular es difícilmente comprensible sin tener en cuenta el caldo de cultivo en el que nace y las dinámicas internas que han permitido a los regímenes perpetuarse en el poder durante décadas. Las revoluciones obligan, asimismo, a revisar algunos de los discursos tradicionales sobre la relación entre el islam y la democracia y a prestar especial atención a los actores emergentes y, en particular, a la sociedad civil, verdadera artífice de esta primavera democrática. También requieren preguntarnos qué es lo que ha fallado en la relación entre las dos orillas del Mediterráneo y plantear un nuevo marco de cooperación bilateral que no esté basado exclusivamente en criterios economicistas. La nueva coyuntura exige que la Unión Europea retome su agenda socio-política de promoción de la democracia y los derechos humanos para apuntalar los procesos de transición que ahora se abren en Túnez y Egipto, lo que tendría un efecto enormemente positivo para su entorno más inmediato: el Magreb y el Oriente Próximo.

El caldo de cultivo de las revoluciones

Las revoluciones populares árabes ponen fin a una anomalía histórica en el mundo árabe: la marginación de la ciudadanía y su ausencia en el proceso de construcción nacional. Tras el surgimiento del Estado-nación árabe, los ‘padres de la patria’ establecieron partidos oficialistas, aligeraron el papel de los Parlamentos e hicieron sumi-

tos a los sindicatos, todo ello con la intención de garantizarse el monopolio de la política. Mientras que en el mundo occidental la dictadura sólo se dio en periodos limitados, en el mundo árabe el autoritarismo fue la norma y no la excepción. Desde un primer momento, los regímenes autoritarios obstaculizaron el desarrollo de una sociedad civil independiente que, “al constituir una esfera de actividad ciudadana al margen de su control directo, podría convertirse en un contrapeso al poder estatal” (Hawthorne, 2004: 5).

En opinión de Nathan Brown, las Constituciones árabes no implicaron el avance del constitucionalismo, entendido éste como limitación más o menos precisa de poderes y establecimiento de contrapesos por parte de los gobernados para controlar a los gobernantes. En realidad, estas Constituciones, que dejaban indefensos a los ciudadanos y no garantizaban los derechos fundamentales en situaciones de emergencia, eran meros documentos de fachada para enmascarar la naturaleza despótica y tiránica de los Gobiernos (Brown, 2002: 4-6). Tampoco funcionó la separación de poderes, ya que el poder legislativo fue incapaz de controlar al ejecutivo y el poder judicial no pudo limitar al legislativo, con lo que las tendencias autocráticas del ejecutivo no fueron frenadas. Los Parlamentos carecieron de representaciones pluralistas y las elecciones estuvieron sembradas de irregularidades. Todo ello generó una gran decepción social que se tradujo en resignación, absentismo electoral o escapismo (Álvarez-Ossorio y Zaccara, 2007).

En la mayoría de los casos, los dirigentes árabes establecieron, en palabras del intelectual egipcio Saad Eddin Ibrahim, “un ‘contrato social’, explícito o implícito, por el cual el Estado se responsabilizaba del desarrollo, de asegurar la justicia social, satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, consolidar la independencia política y lograr otras aspiraciones nacionales (como por ejemplo, la unidad árabe o la liberación de Palestina). A cambio, sus pueblos abandonaban, al menos por un tiempo, sus demandas en torno a una política liberal participativa” (Ibrahim, 2002: 246-247).

Una mezcla de ideología populista y de instituciones representativas trabajaron, mano a mano, para asegurar la legitimidad de dichos Gobiernos y para desmovilizar a sus sociedades. En los Gobiernos de corte tradicionalista la situación no fue mejor, puesto que en los Estados rentistas petrolíferos las demandas de participación política fueron reemplazadas por promesas de riqueza material (Salam, 2002: 9-10). La sociedad civil árabe fue la principal perjudicada por este ‘contrato social’, debido a que la población no solo se vio obligada a renunciar a su participación política, sino que no tuvo más opción que acatar los métodos coercitivos puestos en práctica por sus regímenes.

Las manifestaciones actuales tienen un claro precedente en las 'revueltas del pan' registradas en Marruecos (1981 y 1984), Túnez (1984), Argelia (1988) y Jordania (1989), que pusieron de manifiesto el divorcio entre la sociedad y el Estado. La aguda crisis económica registrada dio la puntilla al Estado benefactor, incapaz de afrontar las necesidades de sus ciudadanos con lo que rompió el 'contrato social'. Los planes de ajuste estructural, impuestos por el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la deuda externa, obligaron a los Gobiernos a dejar de subsidiar los productos básicos, a despedir a miles de trabajadores del sector público y, sobre todo, a reducir los fondos destinados a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Esta retirada del Estado fue desordenada, lo que dejó un importante vacío que fue paulatinamente cubierto por los movimientos islamistas y la sociedad civil.

Un cambio de paradigma

Sin duda una de las principales lecciones de las revoluciones árabes es el cuestionamiento del paradigma de la excepción islámica, según el cual islam y democracia son irreconciliables. Igualmente importante es que las revoluciones hayan sido esencialmente movimientos no violentos, lo que nos obliga a destacar el valor de la resistencia civil como medio para poner fin a los sistemas autoritarios y asentar la democracia.

En las últimas décadas se ha venido insistiendo en que el mundo árabe islámico no puede desarrollar una sociedad civil debido a la impermeabilidad de dichas sociedades a los procesos de secularización, condición ineludible para la existencia de un pluralismo intelectual y político (Gellner, 1996). Otra razón que explicaría esta supuesta excepción islámica sería la imposibilidad de separar poder espiritual y poder terrenal (Lewis, 1996). Esta lectura culturalista y determinista no coincide, sin embargo, con la situación sobre el terreno y con la eclosión de organizaciones, asociaciones y movimientos de diversa índole registrada en el conjunto del mundo árabe.

La sociedad civil no ha dejado de crecer durante las tres últimas décadas, lo que cuestiona que el islam sea incompatible con el desarrollo de una sociedad civil autóctona. Desde 1980 hemos asistido a la proliferación de organizaciones privadas sin ánimo de lucro, asociaciones de defensa de los derechos humanos y de desarrollo comunitario, fundaciones científicas o caritativas, organizaciones femeninas, sindicatos profesionales, círculos de licenciados universitarios y, sobre todo, ONG, cuyo número se estima hoy en cerca de 125.000 en el conjunto de los países árabes cuando en 1960 no alcanzaban las 10.000. Posiblemente la suerte de las revoluciones

Sin duda una de las principales lecciones de las revoluciones árabes es el cuestionamiento del paradigma de la excepción islámica, según el cual islam y democracia son irreconciliables

populares hubiera sido diferente de no existir este caldo de cultivo. De hecho no hay nada en las sociedades islámicas que las haga incompatibles con la democracia, los derechos humanos, la justicia social o la gestión pacífica de los conflictos, como pretenden hacernos creer quienes defienden la existencia de una excepción islámica. Asef Bayat, profesor de la Universidad de Leiden, denuncia a quienes plantean una lectura literalista de los textos sagrados islámicos, ya sea desde una óptica orientalista o desde un prisma religioso ultraortodoxo, y a los que consideran que conceptos como el de ciudadanía, libertad y tolerancia no tienen cabida en el mundo árabe. En su opinión, “no hay nada intrínseco en el islam, o en cualquier otra religión, que la haga inherentemente democrática o no democrática, pacífica o violenta” (Bayat, 2011: 43).

Uno de los hechos más relevantes de las revoluciones populares árabes es que, desde un primer momento, los manifestantes han apostado por la no violencia y no se han replanteado su posición a pesar de la fuerte represión de la que han sido objeto. La idea de que la resistencia civil y el activismo no violento podrían contribuir a asentar la democracia y el buen gobierno en el caso de darse las condiciones adecuadas, tal y como ahora parece ocurrir, ha ido calando en las sociedades árabes en el curso de las últimas décadas y, de manera especial, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Por lo tanto se impone prestar más atención a aquellos movimientos que abogan por el empleo de la no violencia como vía para alcanzar la democracia. A lo largo de la historia, “grupos en todo el mundo han adoptado la resistencia civil con una multitud de propósitos: resistir al colonialismo; enfrentarse a una invasión u ocupación extranjeras; contestar elecciones amañadas, dictaduras o gobiernos militares; lograr derechos para las minorías o erradicar la discriminación institucional” (Stephan, 2011: 1). Precisamente porque el mundo árabe-islámico se suele percibir como presidido por el conflicto y la violencia, es pertinente subrayar, como hace Stephan, que sus poblaciones “han luchado durante décadas por los derechos, las libertades, la autodeterminación y la democracia sin emplear la violencia”. Otro asunto es que no encontraran respaldos externos en esta silenciosa lucha.

Además del carácter no violento de las revueltas debe destacarse la importancia que han tenido las nuevas tecnologías a la hora de movilizar a las poblaciones árabes hasta el punto de que es pertinente hablar de ‘ciber-revueltas’. Facebook y Twitter han tenido un peso esencial al convocar las manifestaciones y reclutar a nuevos activistas. Como advertiera Habib Battah, “el reciente desarrollo de productos relacionados con Internet, telefonía móvil y nuevas tecnologías está proporcionando un nuevo espacio donde las opiniones políticas y los comentarios de la gente no se encuentran sujetos al estrecho control del Estado” (Battah, 2008: 87). Dichas tecnologías han permi-

tido sortear la censura y han hecho posible una cierta libertad de expresión a la hora de abrir debates públicos sobre ciertos tabúes políticos, en particular a través de los blogs.

Como señalan North y Rockwell, “las fuerzas de la oposición ahora están conectadas, no organizadas. Esto no había ocurrido antes en la historia. Las masas pueden comunicarse con gente similar tras pagar un ordenador y una conexión a Internet” (North y Rockwell: 2011). No obstante, la penetración de Internet es todavía limitada en el mundo árabe (un 21 % según Internet World Stats) por lo que no debe infravalorarse el papel jugado por Al-Yasira, que es el medio predilecto de los árabes para acceder a la información veraz. Las cadenas por satélite y, ahora, las redes sociales han sido capaces de romper el monopolio estatal sobre la información.

Los nuevos actores sociopolíticos

La principal novedad es que esta ‘intifada global’ no está dirigida por los islamistas, sino por jóvenes laicos que demandan el final de las dictaduras

La principal novedad es que esta ‘intifada global’ no está dirigida por los islamistas, sino por jóvenes laicos cuya paciencia se ha agotado y que demandan el final de las dictaduras. Debe tenerse en cuenta que un 65 % de la población árabe tiene menos de 35 años y que la mitad de ellos (cerca de 100 millones de personas) tiene entre 15 y 29 años. Los índices de desempleo entre los jóvenes son excepcionalmente elevados, hecho que impide que puedan formar una familia o acceder a una vivienda y, a la vez, genera una elevada frustración. También existe “una gran brecha disfuncional entre las competencias adquiridas por los jóvenes de la región MENA — Oriente Medio y Norte de África—, tradicionalmente orientadas al hipertrofiado sector público, y las solicitadas por los nuevos mercados laborales en el contexto de la reestructuración económica exigida por la competencia global” (Jiménez Araya, 2011).

Tanto la oposición laica como los grupos islamistas han ido a remolque de la sociedad civil y, en particular, de los jóvenes, que han asumido el peso central de las movilizaciones. Los ‘días de la ira’, como se ha bautizado a las manifestaciones que recorren Túnez, El Cairo, Amman, Deraa o Sana, han sido convocados por una juventud desencantada que no tiene nada que perder y que ha perdido el miedo a los regímenes y a sus fuerzas de seguridad. Estudiantes universitarios y jóvenes en paro han tomado la calle para denunciar la corrupción y exigir democracia. Las multitudinarias manifestaciones evidencian que el pueblo está hambriento de libertades.

Las manifestaciones no hubieran tenido éxito sin contar con la activa implicación de la sociedad civil. Este actor, que ha pasado habitualmente desapercibido, ha cobrado una gran importancia en el

curso de las últimas décadas. Hoy en día, hay cerca de 125.000 asociaciones vinculadas a la sociedad civil en los veintiún países árabes. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué entendemos por sociedad civil árabe. Abdou Filali-Amsari resalta su voluntad de “contrarrestar el dominio del Estado sobre la sociedad e incidir en él con el fin de que asuma su papel de guardián de la paz y árbitro entre los diferentes intereses de los ciudadanos” (Filali-Amsari: 2002). Entre sus demandas más frecuentes están “la libertad y limpieza de los procesos electorales, la aplicación de los derechos humanos elementales, la descentralización y el empoderamiento de las estructuras de gobierno local, unos servicios públicos más eficientes, unos gastos públicos más transparentes, un mayor progreso hacia la igualdad de géneros, una cobertura sanitaria universal, una mejor protección social, unas políticas de desarrollo sostenibles, un mejor acceso a la justicia y a la información pública” (Nasr, 2005: 15).

Como ha señalado Amy Hawthorne, “para que la sociedad civil juegue un papel democratizador, una masa crítica de organizaciones y movimientos debe desarrollar tres atributos esenciales: autonomía del régimen, una agenda prodemocrática y la capacidad para construir coaliciones con otros sectores de la sociedad civil para impulsar el cambio democrático” (Hawthorne, 2004: 11). Habitualmente, los Estados han tenido una posición ambigua con respecto a las organizaciones de la sociedad civil: por un lado, éstas les prestan un servicio eximiéndolas de algunas responsabilidades en el ámbito económico, educativo, social o sanitario (siguiendo la misma lógica del Estado mínimo o neoliberal); pero, por otro lado, les preocupan en la medida en que las prácticas voluntarias, participativas, cooperativas, tolerantes y pluralistas de dichas asociaciones crean unos hábitos y un estado de ánimo que podrían propagarse a todos los niveles, minando la autoridad de los Estados o, en todo caso, confiándola allí donde debe ejercerse.

El efecto dominó

El malestar árabe nace de situaciones similares aunque no idénticas, de una acumulación de frustraciones sin resolver: unos regímenes autocráticos que se perpetúan desde la noche de los tiempos, una gerontocracia desconectada de la realidad que se aferra al poder, una corrupción endémica que ha corroído las estructuras de gobierno, una democracia de fachada que ha devenido en un sistema pluralista autoritario, una asfixiante persecución de toda disidencia política y una sistemática vulneración de las libertades fundamentales. Este déficit de legitimidad popular de los gobernantes ha sido contrarrestado a menudo con una sobreactuación del aparato coercitivo cuando las demandas de la población se elevaban demasiado.

La gran mayoría de regímenes árabes se verán obligados a modificar sus pautas de comportamiento y a ofrecer reformas reales tanto en el plano económico como político

Esta radiografía quedaría incompleta sin aludir al agudo deterioro económico. En primer lugar encontramos a un Estado benefactor incapaz de hacer frente por más tiempo a las crecientes necesidades de la población (vivienda, educación y sanidad) y a la incorporación al mercado laboral de los hijos del 'baby boom' árabe. En segundo lugar existe una desigual repartición de la riqueza, ya que el fuerte crecimiento registrado en los últimos años tan sólo ha favorecido a un reducido grupo asociado con el poder, principal beneficiario de los procesos de privatización de las empresas públicas. Mientras tanto, las condiciones de vida del grueso de la población han experimentado un agudo retroceso. Un 45% de los ochenta millones de egipcios vive bajo el umbral de la pobreza, al igual que un 30% de los sirios.

La posibilidad de un contagio de las manifestaciones de descontento popular al conjunto árabe era previsible, especialmente tras la caída de Ben Alí en Túnez y de Mubarak en Egipto. Aunque las revueltas no tienen por qué tener la misma intensidad ni tampoco ser inmediatas, lo cierto es que la gran mayoría de regímenes se verán obligados a modificar sus pautas de comportamiento y a ofrecer reformas reales tanto en el plano económico como político. En este sentido es necesario recordar la multiplicidad de formas de gobierno y las profundas diferencias existentes entre tres grandes zonas geográficas: el Magreb, Oriente Próximo y el Golfo. Aunque es cierto que los veintidós Estados árabes pertenecen a una misma área político-cultural, lo cierto es que existen notables diferencias en ciertas variables como la evolución del Estado, los regímenes políticos, la estructura de clases, la cultura política, los niveles de desarrollo socioeconómico o la situación de la sociedad civil (Ibrahim, 2002: 245).

Por el momento, las manifestaciones han tenido especial impacto en las repúblicas de Libia, Yemen, Egipto y Túnez que eran gobernadas por Gadafi, Saleh, Mubarak y Ben Alí desde 1969, 1978, 1981 y 1987, respectivamente. También en Siria se han experimentado amplias movilizaciones populares en contra de los Asad, en el gobierno desde 1970. En Argelia las revueltas no han conseguido activar a la población, probablemente debido a la cruenta guerra civil que sacudió el país en la década de los noventa y al factor balsámico del petróleo y del gas, aunque existe un palpable hartazgo hacia los militares que siguen controlando buena parte de los recursos del Estado bajo la presidencia de Bouteflika, que ya fuera ministro de Asuntos Exteriores en 1963. Igualmente la Autoridad Palestina, fuertemente cuestionada por el fracaso del proceso de paz, es dirigida por una gerontocracia vinculada a la OLP desde la guerra de los Seis Días. En este caso, los manifestantes exigen el final de la artificial división entre la Franja de Gaza y Cisjordania y la unificación de las filas palestinas contra la ocupación israelí.

Por el momento las monarquías árabes se han mostrado más sólidas que las repúblicas, aunque no puede descartarse que sigan una evolución similar, a pesar de que algunos de sus reyes apenas llevan una década en el trono: Mohamed VI de Marruecos, Abdallah II de Jordania y Abdallah de Arabia Saudí llegaron al poder, respectivamente, en 1999, 2000 y 2005. En los dos primeros países, el malestar de la población es evidente y la sociedad reclama mayores libertades, pero también ayudas económicas para hacer frente al alza del coste de la vida. Ambos cuentan con cierto pluralismo político y celebran habitualmente elecciones con cierto grado de multipartidismo, pero las monarquías disponen de amplísimas prerrogativas en los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso las demandas se centran en la necesidad de instaurar monarquías constitucionales y de limitar los poderes reales. El caso de Arabia Saudí es más complejo, puesto que los partidos políticos y los sindicatos están estrictamente prohibidos y no existen en la práctica, por tanto, canales para movilizar a la población. En Bahrein las movilizaciones han adoptado, desde un primer momento, un cariz sectario, ya que la mayoría de la población es de confesión chií y ha sido tradicionalmente excluida del ámbito político por la dinastía suní gobernante: los Al Khalifa.

La comunidad internacional

Pese a la existencia de este mar de fondo, las revueltas árabes han tomado por sorpresa no solo a los dirigentes árabes, sino también a buena parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional no ha estado a la altura de las circunstancias. El silencio de la mayoría de los países occidentales ante la represión de las manifestaciones pacíficas ha sido esclarecedor y ha reforzado la imagen de un Occidente con un doble discurso que, por una parte, echa mano a la retórica de la democracia y los derechos humanos cuando le conviene y, por la otra, se alinea con las dictaduras que oprimen a sus pueblos con el pretexto de que sirven de muro de contención al radicalismo islámico.

Esta posición de la Unión Europea choca frontalmente con el Tratado de Lisboa, que demanda que la acción exterior de la Unión se base “en los principios que inspiraron su creación”, entre los que se cuenta la universalidad de los derechos humanos. No obstante, está en la línea de lo previsible, puesto que la Unión por el Mediterráneo surgida en 2008, erigida sobre las ruinas del Proceso Euro-Mediterráneo de Barcelona, interpretó que sus prioridades deberían ser la intensificación de los vínculos comerciales, la lucha contra el terrorismo islámico y el control de la inmigración, en lugar de poner el énfasis sobre la agenda social y política.

*Los autócratas
árabes han
exagerado la
amenaza
yihadista,
obteniendo carta
blanca de los
países
occidentales para
reprimir a sus
opositores*

Como resultado de esta actitud, la credibilidad de los Veintisiete ha quedado fuertemente erosionada en el Magreb y Oriente Próximo y, probablemente, tardará mucho en recuperarse, a tenor de los posicionamientos de los responsables de su política exterior, que han ido siempre a remolque de Estados Unidos. Por el contrario, la Administración de Obama ha sido capaz de adaptarse con rapidez a la nueva coyuntura: mientras Francia ofrecía asesoramiento para acallar la 'revolución de los jazmines', Washington presionaba a los militares para que no sofocasen por la fuerza las manifestaciones.

Por ello deben extraerse, en el menor plazo de tiempo, las consiguientes lecciones para no volver a cometer los mismos errores. Sin duda, la tarea más perentoria es comprender la naturaleza del fenómeno y entender la magnitud del cambio al que nos enfrentamos y no concentrarse meramente, como ocurriera en el pasado, en los retos securitarios que implica. Desde 2001, Estados Unidos ha vivido bajo el síndrome del 11-S lo que le ha llevado a sobredimensionar la amenaza de Al-Qaeda e infravalorar el malestar de la calle árabe hacia sus dirigentes. Curiosamente Túnez, Egipto y Libia reforzaron sus vínculos con Washington en la última década al presentarse como muros de contención al islam radical. No en vano, Ben Alí, Mubarak y Gadafi coincidieron en señalar a las huestes de Bin Laden como inspiradoras de las primeras manifestaciones que recorrieron Túnez, El Cairo y Trípoli. Tal proceder evidencia que los autócratas árabes han exagerado cuanto han podido la amenaza yihadista, obteniendo carta blanca de los países occidentales para reprimir a sus opositores.

El énfasis en el combate contra Al-Qaeda ha impedido observar dos cambios trascendentales desarrollados en las sociedades árabes en esta última década. De una parte, la aparición de nuevos movimientos sociales que han desplazado a los, por otra parte inoperantes, partidos de oposición tradicionales. Los antecedentes del Movimiento del 25 de Enero en Egipto hay que buscarlos en Kifaya, creada como frente opositor a los delirios monárquicos de los Mubarak, donde los jóvenes laicos y las nuevas tecnologías ocupan un lugar central. De hecho fue el asesinato de un conocido bloguero el detonante de las primeras movilizaciones. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea percibieron la magnitud de este malestar ni, en consecuencia, se dieron cuenta de la debilidad de sus tradicionales aliados.

El segundo elemento que ha pasado inadvertido ha sido la evolución de los movimientos islamistas. La apuesta por la vía democrática fue acelerada por la irrupción de Al-Qaeda como actor transnacional con los atentados del 11-S. De hecho, el movimiento yihadista no sólo tenía como objetivo, como habitualmente se suele pensar, a Occidente sino también a los movimientos islamistas moderados a los que acusaba de connivencia con los regímenes autoritarios ára-

bes por su renuencia a emplear la violencia para derrocarlos. La enérgica condena de los atentados del 11-S por los Hermanos Musulmanes (ya fueran egipcios, sirios, palestinos o jordanos) fue acompañada de la aproximación al resto de partidos opositores para coordinar sus acciones y el reconocimiento de la pluralidad de las sociedades árabes. Lejos de ser una mera táctica, este movimiento evidencia que estos grupos toman como referente al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) turco y a su intento de conciliar islam y democracia.

Ante este *tsunami* democrático árabe la comunidad internacional ha de revisar algunas de sus políticas tradicionales hacia el Magreb y Oriente Próximo. Si no quiere perder el tren de la historia, la Unión Europea deberá entablar diálogo con los actores políticos emergentes (tanto los movimientos juveniles que han encabezado las revueltas como los partidos islamistas que acepten las normas democráticas) y, de manera firme y decidida, respaldar todas aquellas medidas encaminadas a favorecer una transición ordenada. Más que recurrir al tradicional paternalismo etnocentrista del pasado, la Unión debería secundar las reivindicaciones de los manifestantes: establecimiento de un marco democrático, legalización de todos los partidos políticos, reforma de las leyes electorales, enmiendas de las Constituciones, derogación del estado de emergencia y, por último, celebración de unas elecciones libres.

¿Hacia dónde van las revoluciones?

Probablemente la mayor incógnita de esta ola democratizadora es saber el calado de las reformas que se adoptarán en aquellos países que sean bañados por ella. ¿Qué pasos darán Túnez, Egipto y el resto de países que sigan su estela en esta fase de transición? La formación de Gobiernos de unidad nacional, la legalización de los partidos, la derogación de las leyes de emergencia, la liberación de los presos políticos y el retorno de los disidentes del exilio son pasos en la buena dirección, pero no suficientes. En este proceso constituyente, en el que deberían participar todas las fuerzas políticas sin exclusión alguna, las actuales Constituciones habrán de ser reemplazadas por otras realmente constitucionalistas. También deberán celebrarse elecciones libres, transparentes y realmente competitivas, para lo que es imprescindible levantar un sistema pluripartidista y garantizar la libertad de prensa, de reunión y de expresión. Todo ello no se puede construir de la noche a la mañana, sino que se necesita tiempo y, sobre todo, consenso interno.

Si bien es cierto que las manifestaciones fueron dirigidas por la juventud laica, lo cierto es que las formaciones islamistas tendrán un

El islam político suele ser descrito como inmutable, pero está en permanente movimiento. Numerosos islamistas apuestan ahora por la democracia y la no-violencia

papel relevante en el futuro inmediato. Ello no debería implicar, ni mucho menos, una evolución a la iraní. Pese a que el islam político suele ser descrito como estático e inmutable, lo cierto es que está en permanente movimiento y tiene una gran capacidad de adaptación, como demuestra el caso del AKP turco. En las últimas décadas, los Hermanos Musulmanes han recorrido un largo camino renunciando a imponer por la fuerza su programa, aceptando el pluralismo de las sociedades árabes y, lo que es más importante, coordinando su acción con el resto de fuerzas opositoras (como en el caso de la Asamblea Nacional por el Cambio en Egipto o el Frente de Salvación Nacional en Siria, por mencionar tan solo dos ejemplos), aunque es evidente que todavía les queda un largo camino por recorrer.

La apuesta de los islamistas por las vías democráticas y la no violencia ha dado pie a que se acuñe el término post-islamismo. Para Bayat hemos superado la época del islamismo para adentrarnos en una etapa post-islamista que se caracteriza por “un esfuerzo para casar religión y derechos, fe y libertad, islam y libertad” y por “un énfasis en los derechos más que en los deberes, en el pluralismo más que en el autoritarismo, en la historicidad más que en la literalidad, en la ambigüedad más que en la certidumbre y en el futuro más que en el pasado”. En definitiva, un intento de casar el islam con la libertad, la democracia y la modernidad (Bayat, 2010: 44).

Existe un amplio repertorio de casos en los que los movimientos islamistas, entre ellos los Hermanos Musulmanes egipcios, el Frente de Acción Islámica jordano o el Partido Justicia y Caridad marroquí, optan por la no violencia y la vía democrática para defender su proyecto político. Dichos grupos “han adoptado la decisión estratégica, o lo que algunos tachan de decisión meramente táctica, de emplear únicamente métodos no violentos para impulsar sus intereses políticos” (Hamid, 2011: 65). A cambio de eso han sido integrados, aunque de manera imperfecta, en el juego político pudiendo formar partidos, tomar parte en las elecciones y ser reconocidos como actores legítimos. Otro tanto podría decirse de Hamas o Hezbollah que forman parte de los parlamentos palestino y libanés, aunque mantengan una bicefalia político-militar debido a su condición de bastiones de la ‘resistencia islámica’ contra Israel.

No está claro, sin embargo, la actitud que adoptará la comunidad internacional ante el ascenso de los movimientos islamistas ni tampoco que la Unión Europea esté dispuesta a aceptarles como interlocutores válidos. De ninguna manera puede volver a repetirse el boicót europeo ante la victoria del Frente Islámico de Salvación y de Hamas en las elecciones argelinas de 1990 y palestinas de 2006, respectivamente, ya que lanzaría el mensaje de que Occidente no está dispuesto a aceptar el surgimiento de formaciones islámicas y democráticas.

Una vez derrocados los regímenes autoritarios queda pendiente la ingente tarea de sentar los cimientos de una democracia sólida. Como señalan Brynen, Korany y Noble, la liberalización política “engloba la expansión del espacio público a través del reconocimiento y la protección de las libertades civiles y políticas, en particular de aquellas relacionadas con la capacidad de los ciudadanos para adoptar un discurso político libre y organizarse libremente para perseguir intereses comunes. La democratización política supone una expansión de la participación política de tal manera que proporcione a los ciudadanos un grado real de control colectivo sobre los asuntos públicos” (Brynen, Korany y Noble, 1995: 3). La tarea no será, ni mucho menos, sencilla.

¿Qué puede hacer la Unión Europea?

Como ya hemos señalado más arriba, Bruselas tiene como asignatura pendiente replantear el proceso euro-mediterráneo y, sobre todo, revisar la Unión por el Mediterráneo copresidida por dos de los grandes perdedores de las revueltas: la Francia de Sarkozy y el Egipto de Mubarak. El nuevo escenario que viven los países de la cuenca sur mediterránea obliga a respaldar los procesos de transición que ahora se abren. En el corto plazo, el énfasis debería ponerse en los dos países donde las revoluciones populares han triunfado, que son precisamente los dos en los que se dan más condiciones para que se asiente la democracia.

Como señala Álvaro Vasconcelos, “los levantamientos democráticos en el Norte de África demandan un cambio radical en la aproximación de la Unión Europea a las relaciones euro-mediterráneas, que han sido regidas tradicionalmente por consideraciones económicas partiendo de la creencia errónea de que la globalización traerá bienestar para todos si los países del Sur atraen hacia sus economías la inversión extranjera” (Vasconcelos, 2011). Por ello, la Unión debería revisar su política hacia el mundo árabe teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Velar por el cumplimiento de la cláusula de derechos humanos en los tratados de asociación con los países firmados en el marco del Proceso Euro-Mediterráneo. De esta manera debería ligar el reforzamiento de la relación bilateral y la concesión de un estatuto preferencial a los avances en el terreno democrático y al riguroso cumplimiento de los derechos humanos.
2. Respalda inequívocamente las demandas a favor de la democratización. En los casos tunecino y egipcio, redoblar los esfuerzos para que la Unión Europea sea vista como un socio que puede contribuir a asentar la democracia. La Unión debería reaccionar con

La Unión Europea debe evitar la inercia de escudarse en el temor al ‘peligro verde’ para seguir apoyando a dictadores

mayor rapidez y coordinación ante los cambios que experimentará el mundo árabe en el futuro inmediato y no conformarse con ir a remolque de Estados Unidos.

3. Reconocer el valor de la pujante sociedad civil árabe (asociaciones prodemocráticas y de defensa de los derechos humanos, prensa independiente, centros de investigación, organizaciones feministas, ONG de desarrollo, etc.) como motor de cambio y reforzar su relación con sus principales actores. Por eso la cooperación internacional europea debería tener en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer sus futuras prioridades en la región.
4. Entablar una interlocución rápida con los actores políticos emergentes, independientemente de su ideología. La Unión Europea debe aceptar la pluralidad política árabe. No puede permitirse el lujo de negarse a dialogar con los sectores islamistas, dado que quedaría descolocada en el nuevo escenario que ahora empieza a edificarse. En este sentido debe evitarse la inercia de escudarse en el temor al ‘peligro verde’ para seguir apoyando a dictadores sin legitimidad popular.
5. Reforzar la cooperación económica, dado que muchos de estos países atraviesan una delicada coyuntura tras los levantamientos populares y la ayuda internacional será esencial para asentar los nuevos regímenes democráticos. Una decidida contribución financiera europea permitiría no sólo consolidar la democracia en estos países, sino también garantizar la estabilidad del área euro-mediterránea.

Referencias bibliográficas

Álvarez-Ossorio, I. y L. Zaccara, (eds.) (2009): *Elecciones sin elección. Procesos electorales en el Mashreq y el Magreb*, Madrid, Ediciones del Oriente y el Mediterráneo.

Battah, H. (2008) “El impacto de las nuevas tecnologías” en Fundación Tres Culturas (2008) : Revista *Culturas*, número 2, *La juventud en el mundo árabe* [En línea]. Disponible en <http://www.tresculturas.org/secciones/publicaciones/culturas/docs/tripa%20culturas%202.pdf>

Bayat, A.(2010) “No Silence, No Violence: A post-Islamist Trajectory” en Stephan, M. S. (ed.) (2010): *Civilian Jihad. Nonviolent Struggle, Democratization and Governance in the Middle East*, Nueva York, Palgrave MacMillan.

Bras, J. P. (2000): “Élections et représentation au Maghreb”, en *Monde Arabe. Maghreb-Machrek*, abril-junio, nº 168.

Brown, N. (2002): *Constitutions in a Nonconstitutional World. Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*. Nueva York, State University of New York.

Brynen, R., Korany, B. y P. Nobel (eds.) (1995): *Political Liberalization and Democratization in the Arab World. Vol. 1. Theoretical Perspectives*: Londres, Lynne Rienner Pub.

Filali-Amsari, A. (2002): “State, Society and Creed: Reflections on the Maghreb”, en Sajoo Aryn, N. (ed.), *Civil Society in the Muslim World. Contemporary Perspectives*. Londres, I.B. Tauris, pp.

Gellner, E. (1996), *Las condiciones de la libertad. La sociedad civil y sus rivales*. Barcelona, Paidós.

Hamid, S. (2010): "Islamists and Nonviolent Action" en Stephan, M. S. (ed.) (2010) *Civilian Jihad. Nonviolent Struggle, Democratization and Governance in the Middle East*, Nueva York, Palgrave MacMillan.

Hawthorne, A. (2004) *Middle Eastern Democracy. Is Civil Society the Answer*, Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace.

Ibrahim, S. E. (1995): "Liberalization and Democratization in the Arab World: An Overview" en Brynen, R., Korany B. y P. Nobel (eds.), *Political Liberalization and Democratization in the Arab World. Vol. 1. Theoretical Perspectives*. Londres, Lynne Rienner Pub.

_ (2002): *Egypt: Islam and Democracy. Critical Essays*. El Cairo, The American University in Cairo Press.

Jiménez Araya, T. (2011): "La juventud árabe, entre la exclusión y la espera", *El País*, 2 de febrero de 2011.

Khader, B. (2009): *Europa por el Mediterráneo: de Barcelona a Barcelona (1995-2009)*. Barcelona, Icaria.

_ (2010): *El Mundo Árabe explicado a Europa. Historia, imaginario, cultura, política, economía, geopolítica*, Barcelona, Icaria.

Lewis, B. (1996), "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview", *Journal of Democracy*, vol. 7, nº 2, pp. 52-63.

Martín Muñoz, G.(1999): *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista*, Barcelona, Bellaterra.

Nasr, S. (2005): *Arab Civil Societies and Public Governance Reform. An Analytical Framework and Overview*, Programme on Governance in the Arab Region-UNDP.

North, G. y L. Rockwell (2011): "Facebook, Twitter, and Revolution", 3 de febrero. [En línea] Disponible en <http://truth11.com/2011/02/03/facebook-twitter-and-revolution>
Norton, R.A. (ed.) (1995): *Civil Society in the Middle East*. Leiden, E.J. Brill.

Pérez Beltrán, C. (ed.) (2006): *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*. Granada. Universidad de Granada.

Salam, N. (2002) *Civil Society in the Arab World. The Historical and Political Dimensions*, Islamic Legal Studies Program. Harvard, Harvard Law School.

Stephan, M. S. (ed.) (2010) *Civilian Jihad. Nonviolent Struggle, Democratization and Governance in the Middle East*, Nueva York: Palgrave MacMillan.

Vasconcelos, Á. (ed.) (2011), *The Arab Democratic Wave. How the EU Can Seize the Moment*, Condé-sur-Noireau, Institute for Security Studies.